

El Boomeran(g)

El blog literario latinoamericano

Obras en gestación > Joaquín Estefanía: *La larga marcha*

JOAQUÍN ESTEFANÍA

La larga marcha

Este libro no es sólo un relato de la política económica del último medio siglo, aunque en ocasiones haya recurrido a fuentes primarias y en otras muchas a los trabajos de los profesionales de una disciplina—la historia económica—que en los últimos tiempos ha aportado una larga nómina de grandes investigadores y divulgadores. Tampoco es únicamente un ensayo hemerográfico, aunque las hemerotecas, analógicas y digitales, sean cada vez más importantes para objetivar los recuerdos. No es un texto sociológico, aunque cite obras y teorías de sociólogos, y trate de hacer sociología. No es una obra política, aunque como sabemos y tantas veces ha sido corroborado, la economía determina en última instancia todo lo demás.

*Tampoco es, sólo, periodismo, aunque mucho de lo que aquí se describe y analiza—y bastantes de los personajes que lo protagonizan—ha sido cubierto y seguido para distintos medios de comunicación (el diario *Informaciones*, el semanario *Cuadernos para el Diálogo*, el periódico económico *Cinco Días*, y sobre todo *EL PAÍS*) por quien esto escribe. Y como tal periodismo, siempre he intentado afinar en el contexto: cualquier acontecimiento que no pueda ser puesto en relación con otros, deviene en algo incomprensible. El periodismo es el primer borrador de la historia. Finalmente, tampoco es únicamente un testimonio, aunque contiene numerosos pasajes y anécdotas, vividas o contadas, así como diversos recuerdos personales que constituyen el ambiente de esta época.*

UN RELATO DE LA LARGA MARCHA: DE LO GRIS A LO GLOBAL

La secuencia que nos conviene para describir estas décadas de historia económica, hasta hoy, habla de cuatro grandes etapas: la primera, la del desarrollismo, es la que va desde 1959 a 1975, cuando muere Franco. La segunda etapa, la de la transición política (1976 a 1985), es aquella en la que se fragua la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), antecedente de la actual Unión Europea (UE). La tercera etapa, la más corta y seguramente la menos estudiada, comprende los años del eurooptimismo (1986-1991); es el tiempo en que los españoles, que tanto han esperado para ingresar en el selecto club continental, se sienten más europeos que nadie, como manifiestan todas las encuestas; la economía y la política apuntan hacia arriba en el sismograma virtual y marchan de la mano por su estabilidad. La cuarta y última etapa es la de la normalidad (desde 1992 hasta hoy); la normalidad encierra picos de sierra, encefalogramas planos, momentos de éxtasis y de pesimismo, y mucho aburrimiento: ya no hay grandes sobresaltos. ¡Bendito aburrimiento para un país castigado por las interrupciones institucionales, muchas de ellas sangrientas!

La historia económica moderna de España es la de una larga marcha hacia Europa. Todos sus hitos, desde que en 1959 se firmó el Plan de Estabilización, han consistido en hacer realidad la idea de *España como problema, Europa como solución*, que elaboró Ortega y Gasset en 1910. El tardofranquismo, la transición, la democracia con sus diferentes gobiernos han insistido en el anclaje europeo como la forma de civilización superior a la que pertenecer. En este escaso medio siglo, los españoles hemos pasado de ser súbditos de una sociedad cerrada a ciudadanos de una Europa abierta que es, con sus aciertos y errores, el cenit del progreso al que ha llegado la humanidad.

LA LARGA MARCHA

PRIMER HITO: EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN

El Plan Nacional de Estabilización Económica, de 1959, es la puerta de cierre de una época—la de la autarquía de los vencedores de la Guerra Civil—y el umbral de otra—la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y en el mundo. Para que el régimen franquista se reformase a sí mismo de las tendencias más extremas, fue necesario que la economía se estrangulase. A finales de los años cincuenta España se encontraba al borde de la suspensión de pagos, con números rojos en la balanza de pagos; era imposible renovar la maquinaria productiva sin hacer importaciones, los alimentos eran escasos y el aparato productivo estaba a punto de colapsarse. El sentido de supervivencia del franquismo y la aportación técnica de un grupo de economistas llevaron al Plan de Estabilización.

El 30 de junio el Gobierno había enviado un memorándum al FMI y a la OECE que contenía toda la información sobre dicho plan; en ese memorándum se declaraba que «había llegado el momento de dar una nueva dirección a la política económica, a fin de alinear la economía española con los países del mundo occidental y de liberarla de intervenciones heredadas del pasado». Sus objetivos, según Ullastres, eran cuatro: «Convertibilidad, estabilización, liberalización, integración». El plan, ya lo hemos dicho, pretendía reducir la inflación, liberalizar el comercio exterior, conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios y liberalizar también la actividad interna. En definitiva, lograr un mayor desarrollo aprovechando la coyuntura mundial y facilitar la integración de la economía española en la internacional, comenzando por la CEE. El Plan supuso una reorientación radical de la política económica en dos sentidos: era un tratamiento de *shock* (empleando la terminología usada por el FMI) de una economía afligida por desequilibrios externos e internos que habían adquirido una gravedad desmesurada para poder ser combatidos con éxito con recetas autárquicas; y suponía la aceptación sin reservas de los principios del capitalismo liberal: la renuncia a una economía cerrada e intervenida por el Estado, y la aceptación de que ésta había de ser reemplazada por una economía más o menos regulada por el mercado y abierta al exterior.

LOS PACTOS DE LA MONCLOA: EL COMPROMISO HISTÓRICO ESPAÑOL

Juan Miguel Villar Mir es el hombre central para nuestra historia. Porque su presencia puede dar inicio a la transición económica. ¿O más bien este tiempo es el último acto del tardofranquismo, una especie de transición predemocrática a la transición democrática? Las dos versiones se han sostenido, aunque nuestro protagonista nunca haya opinado sobre ello de forma pública hasta ahora. Villar Mir defiende la primera: «Si se es riguroso y no partidista, hay que convenir que

éste será el primer Gobierno de la transición. La primera declaración que hace el Gobierno el día en que tomamos posesión, el 12 de diciembre de 1975, es inequívoca; es una verdadera separación del pasado y una auténtica apertura a los nuevos tiempos. Y muy sincera. A mí me tocó escribir los párrafos económicos de esa primera declaración del Gobierno con unos criterios absolutamente divorciados de los de la etapa anterior. Creo que no se ha tenido en cuenta lo bueno que fue que el primer presidente del Gobierno de la nueva etapa fuera el mismo de la época anterior. No fue una rémora para la transición, sino todo lo contrario. Nuestro Gobierno, desde el primer día, pensó que éramos el Gobierno de una España distinta caracterizada por dos aspectos: la Monarquía y la democracia. Desde el primer día, todos los ministros y también el presidente del Gobierno estuvimos vendiendo en España y fuera la idea de que representábamos a una nueva España monárquica y democrática. Claro que esos valores, que estaban naciendo entonces, no estaban consolidados».

Le pregunto a Villar Mir por cada uno de los miembros de aquel Gobierno, por Arias, Calvo Sotelo y el resto de los ministros del área económica (Pérez de Bricio, Virgilio Oñate, Antonio Valdés, Francisco Lozano Vicente...), de alguno de los cuales no se ha oído hablar nunca más o han muerto. Las opiniones sobre ellos carecen de mayor interés porque, en el uso de la urbanidad, en todos los casos son meras alabanzas de la persona y de su labor. Si cabe, hay cuatro reflexiones que se salen de la tónica general; la primera, sobre Calvo Sotelo, «que es muy político y que fue al Ministerio de Comercio, un departamento horizontal muy difícil. Calvo Sotelo me dijo: “Yo hubiera querido ser ministro casi de cualquier cosa, menos de Comercio”; pero aceptó, aguantando como los demás la impopularidad de la política económica que diseñamos, aunque unos la notaron y la resistieron mejor que otros. Es posible que Leopoldo la notase más porque él quería hacer carrera en la política (llegó a ser presidente del Gobierno)».

La situación no tendría remedio, comenta el vicepresidente económico de la época, si todos los ciudadanos no comenzaban por cumplir sus deberes al tiempo que exigían sus derechos, porque el Gobierno —ni ése, ni ninguno—no disponía de fórmulas mágicas para conciliar lo irreconciliable; reclamar esas responsabilidades exigía poder pactar los sacrificios con equidad. Ése fue el propósito de los Pactos de La Moncloa, cuyos intérpretes tenían necesariamente que ser los partidos que disfrutaban ya de legitimidad democrática. Las respuestas a la crisis exigían sacrificios compensados de todos los grupos sociales. Dicho en otros términos: el tratamiento de la crisis reclamaba una política de Estado y no de partido, para posibilitar el sistema democrático. Este sentido de *finalidad común* de las distintas ideologías y partidos tenía que servirse de una política de consenso que, por la vía del acuerdo, la transigencia y el pacto, ofreciese las respuestas eficientes reclamadas por la gravedad de la coyuntura. De esta manera se reconocía que el principal problema político español era el económico y, al mismo tiempo, que la principal solución a los problemas económicos estaba en el consenso y en el pacto político. El régimen democrático ganaría así su legitimación ofreciendo soluciones eficaces a los agobiantes problemas planteados por la economía.

Suárez leyó el documento de los Pactos de La Moncloa a finales de junio de 1977. «A las cinco de la tarde», recuerda Fuentes. Preguntaba por cada detalle. Cuando salió la carta que convocaba a los partidos políticos para llegar a un acuerdo definitivo, hubo varios miembros del Consejo de Ministros que expresaron su pesimismo sobre el hecho mismo de que todos los partidos acudieran. Primero llegaron los catalanes y los vascos, luego los comunistas y a continuación todos los demás. «Siempre he creído que Suárez había pactado con Santiago Carrillo su presencia en la reunión. Fraga, por Alianza Popular, intervino para decir que si el Gobierno había ganado las elecciones era al Ejecutivo, y sólo a él, a quien correspondía

responsabilizarse de las dolorosas medidas que había que tomar. Pero se le convenció. Yo había sido profesor de todos los economistas que había en la mesa de negociación, y ello facilitó las cosas, porque sabían que no les iba a engañar. Tenía la seguridad de que no podíamos fracasar. De que estábamos viviendo un momento histórico que sería catastrófico desperdiciar. Creo que en esa reunión me crecí y estuve muy convincente. Enrique Iglesias, el que fue secretario general de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [y hoy secretario general de Iberoamérica, un cargo consensuado por todos los países iberoamericanos, España y Portugal, con sede en Madrid], me dijo mucho tiempo después que así se lo había comentado Felipe González».

En 1969, apenas un septenio antes del comienzo de la transición, un envejecido Max Aub volvió a España. Fruto de aquella corta estancia de poco más de dos meses, escribió *La gallina ciega*. En ese libro, el intelectual exiliado se pregunta: «¿Dónde está nuestra España? ¿Dónde queda? ¿Qué han hecho de ella?... Esto que veo, España, es la realidad. Lo que pienso que es... no es la realidad... Aquí no es que no haya libertad. Es peor: no se nota su falta». Su balance es deprimente: el país había entrado en un túnel hacía tres décadas y salía a otro paisaje diferente, muy mediocre. Un septenio después había motivos para ser más optimista: se había roto con una España que tenía poco que ver con la soñada por el exilio republicano, que representaba Aub, pero también con la grisura forjada en la posguerra por el general Franco y los suyos. La transición supuso eso. Pero la transición es un camino hacia la normalidad.

DESPUÉS DE MARX, ABRIL

El periodista se le acerca. Fernando Abril Martorell (FAM) está acodado en la barra del bar del Congreso de los Diputados. Le acompañan José Pedro Pérez Llorca y Rafael Arias Salgado, ambos de UCD, a quienes se considera políticos muy cercanos a él. Es la primera hora de la tarde y está a punto de comenzar un pleno. Se palpa el ambiente de las grandes tardes parlamentarias, aunque ese ambiente es muy nuevo para ser considerado tradicional. FAM toma un café solo doble y aspira el humo de un cigarrillo: es difícil encontrar una imagen más típica de quien es uno de los hombres más poderosos del momento y, por ende, de la transición.

TEORÍA DE SEIS PACTOS SOCIALES

La historia de la transición en España es también, en buena parte, la historia de los acuerdos sociales que se firmaron en ella. Seis grandes pactos en 12 años. Hagamos unas preguntas ucrónicas: ¿Qué hubiera ocurrido si no se hubieran firmado esos pactos? Y más precisamente: ¿qué es lo que cambió—y lo que permaneció—en España tras la firma de los seis pactos sociales que se dieron? Los contenidos de los acuerdos sociales se pueden vincular con la política económica que cada año se incorpora a los Presupuestos Generales del Estado, para concluir con la siguiente teoría: creciendo como lo hizo la presión fiscal individual en España en el periodo de la transición hacia cotas más aproximadas a las de los países de nuestro entorno europeo (algunos de ellos, los más avanzados del planeta, desde el punto de vista social)—no así la presión fiscal general, mucho más modesta debido a los altos porcentajes de fraude fiscal en nuestro país—, y siendo por el contrario más humildes los servicios que prestaba el Estado, se puede concluir que lo que se compró con tantos impuestos fue paz social. De nuevo la teoría de ganar tiempo para obtener una sociedad normalizada desde el punto de vista democrático, tras casi cuatro décadas de dictadura. La paz social como clave de la transición.

El 10 de julio de 1979, la UGT y la CEOE firman el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI). Muy poco conocido, el ABI es, sin embargo, el antecedente de los grandes acuerdos que posteriormente habían de suscribir ambas organizaciones. La firma del pacto había venido precedida de otros encuentros entre el Gobierno de Suárez, las centrales sindicales y las asociaciones patronales. Abril Martorell, el hombre fuerte del momento, estaba empeñado en repetir con los interlocutores sociales lo que a nivel político se había conseguido en los Pactos de La Moncloa.

El AMI se publica en el *Boletín Oficial del Estado* el 14 de enero de 1980. En su estructura difiere mucho del ABI. Su texto está dividido en 14 capítulos que abordan desde la naturaleza del propio pacto a la definición del papel de los comités y los delegados de empresa, pasando por el absentismo y los incrementos salariales de los trabajadores afectados. El AMI se firma con una vigencia de dos años; por primera vez se establece una banda salarial de referencia para los convenios negociados a su amparo, que fluctúa entre el 12% y el 15%. Banda susceptible de modificación en función de la situación de la empresa o sector. También por primera vez se introduce, como hemos visto, la revisión salarial, que en el caso del AMI contiene una mención especial en relación a la repercusión de la gasolina en el incremento de los precios. La incidencia del coste del petróleo no se tendrá en cuenta a la hora de realizar la revisión salarial. La jornada laboral queda fijada en 1.980 horas, lo que supone una reducción de 26 horas en el cómputo anual, y para el año 1982 se fija una jornada de 1.880 horas al año. Se intenta establecer un control sobre la realización de horas extraordinarias y fijar normas sobre productividad y absentismo. [...] Pero sobre todo, en el AMI se definen con bastante precisión el papel de los sindicatos y las patronales en la negociación colectiva y los derechos de las organizaciones obreras y sus representantes.

Las negociaciones del ANE, a pesar del ambiente político creado por la intentona golpista, fueron difíciles. Varias veces estuvieron las partes al borde de la ruptura. Tal vez por la extrema necesidad que los agentes concedían al consenso en un momento de debilidad política, el ANE aparece minado por acuerdos secretos que le restan credibilidad. Hay al menos dos compromisos que no se recogieron en el texto suscrito en la tarde del 9 de junio: el primero se refería al establecimiento de una ayuda institucional a los sindicatos, que se presentaba como cantidad a cuenta del patrimonio sindical acumulado. En total eran 800 millones de pesetas anuales (casi cinco millones de euros) durante tres años, y en ese periodo las centrales renunciaban a cualquier reclamación por ese concepto. Esta ayuda económica, actualizada en su valor de acuerdo con la inflación de cada año, quedará institucionalizada en los Presupuestos Generales del Estado. El documento en que se recogía el compromiso económico del Gobierno con los sindicatos no fue hecho público hasta semanas después de haberse firmado el ANE, y ello por la indiscreción de uno de los sindicalistas. El documento, de apenas 20 líneas, recogía también el compromiso del Gobierno de presentar un inventario de los bienes sindicales para realizar de forma definitiva la entrega a las centrales.

El 26 de julio de 1984, Felipe González recibe en La Moncloa a los máximos responsables de CEOE, UGT y CCOO. Almunia y Boyer están presentes en el encuentro. Se trata de intentar un pacto social para los dos años que restan de primera legislatura socialista. Las conversaciones, en las que el Gobierno está dispuesto a intervenir, están tintadas de dificultades objetivas y de rencores personales. La patronal quiere introducir medidas de flexibilidad laboral, una reforma en profundidad de la Seguridad Social y continuar la política de liberalización del mercado financiero. CCOO no aceptará participar en lo que será el AES. Camacho justificará la ausencia

de su sindicato con que la firma hubiese constituido un aval de la política económica de Boyer, basada en el rigor y en el ajuste.

LA ERA DEL CAMBIO: LOS SOCIALISTAS

Miremos de forma consecutiva hacia atrás y hacia delante. El 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gana por primera vez las elecciones generales. Lo hace por mayoría absoluta. Felipe González escoge al primer Gobierno socialista químicamente puro de la historia de España, pues durante la Segunda República (1931-1939) el PSOE hubo de gobernar siempre en coalición con otras formaciones. ¿Cómo encuentran los socialistas la sociedad, la política y sobre todo la economía española? Hagamos una instantánea fija del cuadro macroeconómico de la época: un Producto Interior Bruto casi estancado (la economía crece a poco más del 1%), con una inflación del 14% anual y la tasa de paro en el 17% de la población activa; elevado déficit exterior y hemorragia de reserva de divisas, con un déficit público del 5,5%. Todo reclamaba un nuevo plan de ajuste, que es un mecanismo administrativo, situado al margen del mercado, para recomponer las tasas de beneficios empresariales, en un momento en que la ciudadanía española exigía grados de expansión económica en consonancia con la coyuntura política. Recordemos también que a principios de la década de los ochenta no existían los teléfonos móviles ni los ordenadores, y ni siquiera se sospechaba de las posibilidades de comunicación que pocos años después generaría la revolución digital, concretada en internet. En 1982 había una única televisión, la pública, con dos cadenas.

Felipe González apostó desde el primer momento de su largo mandato por una política económica ortodoxa; a los pocos meses de ocupar La Moncloa, el lenguaje económico no sólo del equipo técnico del Ministerio de Economía y Hacienda, sino también del propio presidente, se acercaba mucho más a las recetas y pronósticos del FMI o de la OCDE que al contenido del programa con el que habían ganado las elecciones. Con dos características más: la extraordinaria concentración de *auctoritas* y de *potestas* en la figura del presidente y su respaldo sin fisuras a las tomas de decisión de los sucesivos responsables de la política económica. Cuando Miguel Boyer, en las declaraciones citadas, explica su dimisión como ministro en el año 1985, confirma esa forma de trabajar: «Las reglas del juego que teníamos es que los ministros hacían sus peticiones al titular de Economía y si no había un acuerdo, entonces el presidente actuaba como árbitro. Ello significaba la continua intervención del presidente por los temas más insignificantes. Entonces planteé la conveniencia de que el ministro de Economía fuese vicepresidente y pudiera decidir sin más apelaciones. El partido se opuso y dimití».

Así llegamos a la decisión de la expropiación de Rumasa. Sigamos con el relato de Boyer, en primera persona: «Por la actitud cerrada de Ruiz- Mateos en su desafiante rueda de prensa, el tema de Rumasa fue el dominante en el Consejo de Ministros del día siguiente, 23 de febrero. Al comenzar la reunión, por la mañana expuse al Consejo la información disponible sobre la gravedad de la situación del grupo y sobre el infructuoso intento del lunes para afrontar los problemas con la cooperación entre el Gobierno y Ruiz-Mateos. También expuse—creo que objetivamente— las alternativas posibles de actuación del Gobierno, que había discutido previamente con el Banco de España: a) dejar las cosas a su curso; b) llevar a cabo la expulsión de los bancos de Rumasa del Fondo de Garantía de Depósitos, si no se facilitaban las auditorías; c) intervenir los bancos y las otras empresas del grupo; o d) expropiar las empresas del grupo».

1988 es el año del centenario del nacimiento de UGT. Las relaciones personales entre su secretario general, Nicolás Redondo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Felipe González, no eran las mejores. Cuando ese año se entrevista a Redondo, éste dice que en el Congreso de Suresnes del PSOE, a principios de los años setenta, él eligió a un *Isidoro* (nombre de González en la clandestinidad) que ya no reconoce en el actual Felipe González. La periodista titula la entrevista «En Felipe ya no reconozco a Isidoro» y Redondo se despacha a gusto; cuando se le pregunta si el matrimonio entre el Gobierno y UGT está ya deshecho, contesta: «Sí, pero la contestación a eso la daremos después del 14-D. La sociedad española está confusa. Aquí hay un Gobierno de izquierdas que es aplaudido a rabiar por la derecha y al que critican sus aliados naturales. Y yo les digo: miren ustedes, aquí lo único que tiene lógica es analizar la situación, no se dediquen a insultar a UGT, ni a mí, porque no pienso entrar a ese juego. Porque lo único importante es que este Gobierno tiene problemas con su base real, con ocho millones de ciudadanos».

Almunia describe, en una fuerte autocrítica, la visión irreal que para los dirigentes socialistas supusieron durante el 14 de diciembre aquellas calles vacías, con todos sus comercios cerrados, y trata de analizar las razones: de una parte, la necesidad de protestar frente a un determinado estilo de gobernar, «prepotente, poco dialogante», que consideraba que la razón estaba siempre de parte de quien ejercía el poder, sin tener en cuenta que, en democracia, éste se ejerce gracias a la voluntad de unos ciudadanos maduros, que desean ser escuchados y tenidos en cuenta para algo más que la simple introducción de un voto en la urna cada cuatro años. De otra, que entre quienes respondieron a la llamada de los sindicatos muchos querían conseguir un reparto equitativo del crecimiento. Había calado la idea de que se había acabado el tiempo de los sacrificios y el ajuste económico que había presidido la acción del Gobierno hasta entonces, y que había llegado la hora de recoger los frutos de la cosecha.

EL PARTIDO POPULAR: LA SEGUNDA TRANSICIÓN

De nuevo, cuando se hace un balance de la política económica del PP en el Gobierno no se encuentran elementos de ruptura con las etapas anteriores, a pesar de los esfuerzos de sus teóricos para diferenciarla. El objetivo fue, otra vez, Europa, para lo cual sus primeras medidas fueron continuistas de las aplicadas por el último ministro de Economía de la época González, Pedro Solbes. En 1996 Europa consistía en que España participase desde el primer momento en la creación de la moneda única, el euro, para lo cual se forzaron las medidas macroeconómicas para cumplir los criterios de convergencia incluidos en el Tratado de Maastricht. A saber: tipos de interés bajos y tipos de cambio estables, inflación baja, un déficit público no superior al 3% del PIB y una deuda pública inferior al 60% del PIB. El euro era la prioridad, y todo lo demás, instrumental. En un libro-entrevista con Aznar, publicado por la periodista Victoria Prego, aquél afirma de modo muy gráfico sobre la entrada en el euro: «Eso, para nosotros, los españoles, ha sido como uno que va durante muchísimo tiempo a la estación y siempre viaja en los últimos vagones. Y entonces un día llega a la estación y se monta en el vagón principal. Pues esto es lo mismo. España llevaba ya demasiado tiempo en los últimos vagones pero llegó un día en que dijimos: a la hora que llega el tren nosotros nos subimos en el vagón principal. Ni más ni menos».

Las privatizaciones atribuibles al PP tratan de consolidar, a través de un verdadero plan de desaparición del sector público empresarial, lo iniciado antes. Esas privatizaciones se hacen en el marco de un acuerdo del Consejo de Ministros de junio del año 1996: se asume explícitamente que la privatización de empresas públicas es un elemento constitutivo del objetivo general de política económica consistente en liberalizar la economía española. Esta resolución se acompaña de algunos procesos de desregulación y limitación de las intervenciones financieras públicas en el sector empresarial. El acuerdo del Consejo de Ministros rompió con las pautas establecidas según las cuales, por ejemplo, los gestores de las empresas participaban en las ventas y los empleados del holding público tenían preferencia a la hora de adjudicarse las acciones. Explicita nueve principios que tendrían que afectar a todos los agentes implicados: publicidad, transparencia y concurrencia, eficiencia económica, separación de la propiedad y la gestión de las empresas, sometimiento a control de todas las operaciones, defensa de los intereses económicos generales y de los intereses patrimoniales del Estado, protección de los intereses de los accionistas y de terceros, continuidad del proyecto empresarial de las empresas privatizadas, aumento de la competencia, y extensión de los mercados de capitales y ampliación de la base accionarial de las empresas.

Uno de los aspectos más discutibles de la política económica del PP es su relación con la modernización de España en los aspectos vinculados con la inversión en I+D (investigación y desarrollo) y con la Sociedad de la Información (SI). Que es un modo de hablar del modelo de crecimiento. En esta categoría, la práctica del PP fue bifronte: por una parte iba su discurso público; por la otra, la realidad. En el año 2000 se celebra en Lisboa la reunión de primavera del Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países que entonces conforman la UE acuerdan unos puntos para convertir a Europa en la economía más competitiva y dinámica del mundo con el horizonte en el año 2010; es una ambiciosa estrategia a largo plazo, centrada en la creación de infraestructuras del conocimiento, en el fomento de la innovación y en las reformas del modelo económico y de los sistemas educativos. Se trata de adecuar la UE al enorme cambio que está experimentando el planeta como consecuencia de la globalización y a los desafíos que plantea una nueva economía basada en el conocimiento. En ese periodo, la economía de Estados Unidos es mucho más dinámica que la europea y los procesos de convergencia de ambas, se midan como se midan, alejan a la primera de las de los países de la segunda. En los días previos a la cumbre de Lisboa hay dos dirigentes que se destacan por encima de los demás al publicitar las excelencias de la SI como camino para conseguir ese continente más competitivo: son el laborista británico Tony Blair y el conservador español José María Aznar.

Pero donde más dificultades han tenido Aznar y el PP para convencer de la coherencia entre su discurso y su práctica política ha sido en relación con la verdad y la mentira, conceptos tan amplios y tan subjetivos. Cuando el PP pierde las elecciones en marzo de 2004, tras el atentado terrorista que causó caso 200 muertos en Madrid, muchos lo atribuyen a la herida que los ciudadanos sienten por la administración de la información sobre la autoría de este atentado que administran los portavoces del Partido Popular. Entre los que interpretan esa coyuntura en estos términos está la prensa francesa. El diario *Le Monde* del 16 de marzo de ese año, titula a toda página con la siguiente leyenda: «España sanciona la mentira de Estado», a la que acompaña un dibujo de su caricaturista oficial, Plantu, en el que se ve a Aznar con una larguísima nariz de Pinocho en la que se columpia Bin Laden. El diario *Libération* de un día antes, titula: «España, el precio de la mentira».

«UN ANSIA DE SEGURIDAD PERSONAL Y SOCIAL»

Durante tres cuartos de siglo, antes de entrar en la UE, la economía española había sido periférica, y España un país menor. En este último periodo, España ha experimentado de modo permanente un mayor crecimiento económico que la media, una fuerte creación de empleo y un espectacular proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Según el Programa Nacional de Reformas, que actualiza cada año el Gobierno de turno, en 2006 la economía española creció el triple que la media europea (incremento del PIB del 3,8%). Este dinamismo de la economía española no es nuevo, sino que su PIB se ha incrementado sistemáticamente por encima del europeo (un diferencial de crecimiento cercano a 1,4 puntos porcentuales desde 1996). El paro, que superaba el 20% de la población activa en 1986, cuando España ingresó en la UE, cerró 2006 con un 8,3%, el menor porcentaje desde el año 1979. Las estimaciones del Programa de Estabilidad 2006-2009 eran las siguientes: en el año 2010, la economía española («la quinta economía europea») cumplirá «holgadamente» el gran objetivo que se fijó cuando ingresó, hace más de dos décadas, en la UE: alcanzar el nivel medio de renta de los 27 países de la Unión.

Sería sectario atribuir esta ascensión a la acción política de una sola fuerza o de un único sector de la sociedad española. Éste es el gran mensaje del libro: en el esfuerzo europeo han convivido, aunque sea por razones distintas, desde los tardofranquistas a los comunistas, pasando por centristas, socialistas y populares. En él han tenido un papel destacado—reivindíquese una sola vez—los economistas, que tuvieron que lograr, como un día definió Fuentes Quintana, «que todo lo que era económicamente inevitable fuera políticamente factible».